

# ¿Se puede permitir España suprimir los peajes?

**MANUEL MIÑÉS MUÑOZ**

DIRECTOR-GERENTE CÁMARA DE CONTRATISTAS  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CCCV)

**U**n desmesurado aumento del gasto público sustentado en una subida de impuestos y una relajación del déficit público quizás sea electoralista en el corto plazo... pero antisocial a futuro, ya que supondrá irremediabilmente un frenazo al crecimiento y un aumento del desempleo.

Planteamos un presupuesto expansivo (previsiones de 2019) con un techo de gasto de 125.064 millones de euros que se incrementa el +4'14% para garantizar una recuperación económica –(sic) María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del 20 de julio, al presentar el techo de gasto de 2019 y la relajación del déficit–. ¡Y Pablo Iglesias exige más!

Es un presupuesto profundamente social, distribuye los beneficios de la recuperación –(sic) Montoro el 20 de mayo ante el Congreso durante el debate de los presupuestos de 2018–. La fiscalidad confiscatoria –socialdemócrata– de Montoro piensa ser «evidentemente superada al alza» por Montero.

Si el nombramiento de Nadia Calviño en Economía fue interpretado como un guiño del presidente Pedro Sánchez de armonía con Bruselas –donde Calviño ejercía como directora de presupuestos de la UE–, todo ha sido un puro señuelo. Al mes, abducida por el sistema, reunida con su anteriormente jefe Pierre Moscovici, ha negociado una relajación del déficit, ya que para implementar nuestras políticas sin fin, los objetivos marcados por Rajoy y Montoro «eran inalcanzables».

Nuestro compromiso de déficit con Bruselas del -3,1% sobre el PIB (2017); -2,2% (2018); -1,3% (2019); -0,5% (2020); +0'01 (2021), «a toda prisa» pretendemos aumentarlo en 5 décimas, al -2,7% (2018); -1'8% (2019); -1'1% (2020) y -0'4% (2021). Ello suponía para 2018 una disponibilidad de gasto de más 5.500 millones de euros, de los cuales se transferirán 2.400 a las autonomías. Es una especie de FLA, tan criticado cuando se estaba en la oposición. ¿Por qué no abordar la revisión de la financiación autonómica tan reclamada?

El desfase total adicional equivalente a unos 23.400 millones de déficit se financiará, según Podemos, por emisión de deuda pública del Tesoro y sobre todo incrementando la recaudación fiscal (tasas, aumento de los tipos marginales del IRPF para ingresos mayores de 60.000 euros anuales; nueva creación de figuras impositivas a la banca; tasa verde sobre el diésel; tasa a Google, Facebook, Netflix o Amazon por usar las autopistas de internet; tipo mínimo en Sociedades del 15%, que supondrá que cada asalariado soportará de media unos 1.230 euros de mayor carga fiscal, o referido

al conjunto de españoles, unos 540 euros. Todo ello consecuencia de la 'relajación' del déficit.

Nuestra reputación ante Europa vuelve a caer. Seguimos incumpliendo el déficit pactado. El Reino de España con su irresponsabilidad, es el único país de la UE que al cerrar 2018 al superar el 3% negativo seguirá sometido al procedimiento del déficit excesivo... En el recuerdo de Europa está nuestro rescate, y sobre las espaldas de los españoles queda atrás la crisis financiera, que supuso el gran esfuerzo de los asalariados, de los empresarios, de los jubilados, para pasar del déficit del -9'6% que dejó el PSOE al -3'1% que dejó el PP. ¡Por Dios, no volvamos a las andadas!

España no tiene un problema de gasto sino de ingresos –Montero y Calviño dixit–. Las empresas españolas pagan poco, y menos que sus colegas europeas. Esto son afirmaciones erróneas para justificar decisiones incorrectas. En 2007, de los 1.466 millones de empresas un 56'59% presentaba una base impositiva negativa. En 2017, tras desaparecer 135.000, de los 1.326 millones sobrevivientes el 63,10 % presenta bases imponibles negativas (datos de CEOE y AEAT).

Un estudio de PWC y Eurostat confirma que la aportación de las empresas a la recaudación tributaria total es del 30,4 %, frente a la media europea del 26,20%... Por impuesto de Sociedades, cotizaciones sobre trabajadores, tasas, etcétera cotizan el 46,9% sobre beneficios, frente al 40,9% que es la media de la UE. ¡No nos carguemos a nuestro tejido empresarial, flujo sanguíneo de la economía, creador de empleo y riqueza.

Finalmente, una reflexión para el ministro José Luis Abalos sobre la reversión de las autopistas de peaje y en concreto la AP-7.

¿Puede comprometerse firmemente el Ministerio de Fomento a invertir en la conservación de carreteras de la Comunitat Valenciana los necesarios 82,45 millones anuales además de aportar 152 millones, por una sola vez, que requiere el plan de choque 'due diligence' denunciado por la AEC? ¿Puede comprometerse a las inversiones extraordinarias, en el corto plazo, que supondrá el refuerzo de firmes por la migración de tráfico pesado hacia la autopista AP-7 una vez liberalizada? ¿Podrá acometer las interconexiones necesarias entre la N-340 y la N-332 y la AP-7 que ciframos juntamente con la Generalitat en unos 325 millones de euros? ¿Tenemos capacidad para exigir reciprocidad y circulación sin peajes para nuestros transportistas y automovilistas allende los Pirineos? ¿Consentirá la UE que, incumpliendo el techo de gasto y de déficit, a la vez y en contraste nos permitamos la liberalización de nuestras de Vías de Gran Capacidad (VGC), cuando en el resto de Europa el 100% tienen eurovinieta o peaje tradicional?



THOMAS ASHLOCK